

Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que desestimó la excepción de caducidad de la acción, acogió la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto y condenó al pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar el correcto entendimiento del principio de inmediatez, contenido en el artículo 425, en relación con el artículo 478 letra d) del Código del Trabajo”*.

Cuarto: Que, para demostrar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia que se pide unificar, la recurrente alega que la sentencia que impugna sostuvo que la primera audiencia de juicio se verificó el 26 de julio de 2023; la segunda se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2023, y la notificación de la sentencia se fijó para el día 10 de octubre de ese mismo año. Empero, el fallo definitivo fue expedido el 31 de enero de 2025 y las referidas audiencias fueron dirigidas y el mentado fallo fue suscrito por un mismo magistrado, don José Svato



Nesvara Herrera, sin que sea posible advertir la afectación al principio de inmediación que se alega, al considerar lo prescrito en los artículos 425, 427, 429 y 460 del Código del Trabajo. Añadió que la conclusión así anticipada no se ve modificada por el hecho que, efectivamente, en este caso se verificó un retraso en la dictación del fallo, desde que el principio de inmediación, que se esgrime como fundamento de la invalidación pedida en este extremo y en cuya virtud el juez se ve obligado a presenciar todo el acto procesal, esto es, la audiencia en la cual recibe, percibe y efectúa la valoración de todos los elementos que inciden en un proceso, no resultó transgredido, pues el mismo juez que presidió la audiencia de juicio expidió la sentencia definitiva que resolvió el asunto sometido a su conocimiento, de manera que la dilación en la expedición podría afectar eventualmente otro principio, pero no el de inmediación invocado. Señaló que las causales de nulidad deben ser trascendentes, de manera que, de no acaecer el vicio denunciado, la conclusión a que arribó el juzgador habría sido distinta, circunstancia que, sin embargo, no fue planteada ni desarrollada en el recurso y que tampoco concurre en la especie, toda vez que, si bien se verificó una dilación, no es posible advertir en qué sección o parte específica del fallo ella incidió, distorsionó o deformó el razonamiento desarrollado por el sentenciador para formar su convicción y, en definitiva, acoger la demanda.

Quinto: Que corresponde tener presente lo que esta Corte señaló en las sentencias dictadas en las causas Rol N°147.538-2023, N°58.130-2024, N°59.900-2024 y N°60.620-2024, de 17 de enero de 2025, en el sentido que dado que el Código del Trabajo no posee una norma que sancione expresamente la dilación excesiva sea en la tramitación del proceso o en el pronunciamiento del fallo, como sí ocurre en otros procedimientos reformados, y que la inmediación se configura como un principio y no como una regla, es dable concluir que se trata de una cuestión que debe ser analizada en forma separada e independiente en cada caso, pues existen muchos factores que pueden producir la tardanza reclamada, siendo pertinente examinar si se trata de circunstancias atribuibles al tribunal y, lo que es más importante aún, que hayan tenido efectos en la calidad del producto final del juicio, cual es, la sentencia que pondera la prueba, fija los hechos acreditados, aplica el derecho pertinente y, sobre esa base, dirime el conflicto.

Razonamiento que lleva a concluir, que, dado el carácter casuístico del reproche, no es posible la comparación en lo estrictamente jurídico con otras sentencias que examinen el mismo problema, y que obsta al pronunciamiento de



un enunciado que declare cuál es la interpretación correcta sobre el artículo 425 del Código del Trabajo, aplicable en forma general a todo juicio laboral, sin mayor consideración a sus particularidades.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, el artículo 425 del Código del Trabajo al que alude el recurrente, se limita a consagrar a la inmediación entre los principios de los procedimientos del trabajo, sin contener más reglas que lo desarrollen o que sancionen su infracción, más que la prevista en el artículo 460 del mismo cuerpo legal, que señala “*Si el juez que presidió la audiencia de juicio no pudiere dictar sentencia, aquélla deberá celebrarse nuevamente*”.

Así, nuestra legislación laboral vincula a la inmediación con el miembro de la judicatura, al garantizar por su intermedio que el que pronuncia la decisión sea el mismo que haya percibido la prueba rendida por las partes, prohibiendo la delegación de funciones, pero, sin introducir aspectos temporales, no obstante que, como se advierte en la sentencia allegada por el recurrente, puedan ser relevantes en la medida que produzcan efectos en la calidad de la actividad valorativa.

De ahí el vínculo que la legislación y la doctrina efectúan entre inmediación y oralidad, entendiendo a la primera como un principio procesal que implica la comunicación personal de la judicatura con las partes y el contacto directo con los actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como instrumento para llegar a una íntima compenetración de los intereses en juego a través del proceso y de su objeto litigioso, destacándose que exige el contacto directo y personal del tribunal con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial (Pereira, Santiago; El principio de inmediación en el proceso por audiencias: Mecanismos legales para garantizar su efectividad).

Lo anterior, conduce a precisar que el problema planteado en el recurso que se examina tampoco corresponda a uno de inmediación en sentido estricto, en tanto no se sostiene que quien dictó la sentencia haya sido un miembro de la judicatura distinto de quien percibió en su totalidad la incorporación de la prueba.

Séptimo: Que, de esta manera, no aparece que el tema cuya línea jurisprudencial se procura unificar requiera de la aplicación del mecanismo unificador que importa el arbitrio intentado, por lo que se debe decretar su inadmisibilidad, puesto que la necesidad de uniformar la materia de derecho



propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma que se propone como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente en este caso.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de doce de mayo de dos mil veinticinco.

Regístrese y devuélvase.

N°20.709-25.



PTYWBXRDYHE

Proveído por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Maria Angelica Benavides C. Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecisiete de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

